

Santiago, 9 de enero de dos mil veinticinco.

Vistos y considerando:

Primero: Que ante este tribunal se efectuó la audiencia de juicio oral de la causa seguida contra Pablo Antonio Gajardo Peredo, cédula de identidad nacional Nro. 20.395.058-6, obrero, con domicilio en calle Los Talabarteros Nro. 6245, comuna de Peñalolén, representado por el defensor penal público Mario Llanos López. Sostuvo la acusación el fiscal Omar Mérida Huerta.

Segundo: Que el Ministerio Público fundó su acusación en los siguientes hechos:

El día 26 de septiembre de 2023, aproximadamente a las 14:30 horas, el imputado Pablo Antonio Gajardo Peredo conducía el vehículo marca Subaru de color rojo, portando la patente GHZT-91, siendo controlado por funcionarios de Carabineros en la intersección de Ramón Carnicer con Caupolicán en la comuna de Peñalolén, quienes pudieron evidenciar que las placas patentes adheridas al vehículo presentaban ciertas anomalías concordantes con una placa patente falsificada. Siguiendo con una inspección superficial del móvil, los policías lograron evidenciar que el vehículo en realidad corresponde al automóvil placa patente única BYZD-46, el cual había sido sustraído el 2 de Agosto de 2023 desde un domicilio en la comuna de Ñuñoa por medio de un robo en lugar habitado a la víctima, doña Silvia del Carmen Donoso Sepúlveda, manteniendo encargo por delito de robo Nro. EUN 555494, sabiendo o no pudiendo menos que saber el imputado, el origen ilícito del vehículo que conducía. Realizado el peritaje de rigor, las placas patentes que portaba el vehículo al momento de la conducción, resultaron ser falsas.

Tercero: Que en su alegato de apertura el fiscal destacó la proximidad temporal entre el delito base de robo en lugar habitado del vehículo y la detención por receptación. A juicio del Ministerio Público, la cercanía de las fechas sería un elemento para deducir el conocimiento del acusado respecto al origen espurio del objeto de receptación. A la misma conclusión abonaría la reincidencia del acusado y sobre todo el hecho que las placas patentes desplegadas en el vehículo no corresponden al mismo. Argumentos que reitera en su clausura, estimando cumplida su promesa, especialmente con la declaración del imputado y los funcionarios aprehensores.

Por su parte, la defensa sostiene que adoptará una actitud colaborativa, pues su intención ha sido terminar esta causa desde la etapa de investigación. Señala que su representado renunciará a su derecho a guardar silencio y prestará declaración. Anticipa que en la etapa procesal correspondiente efectuará el resto de

sus alegaciones. En los alegatos de cierre, la defensa sostiene que se trata de un hecho constitutivo de dos delitos, argumentando que el delito de conducción con placas patentes falsas sería un medio de comisión para el delito de receptación. Sugiere que el delito de conducción con placas patentes falsas podría constituir un hecho anexo o satelital al hecho base, el cual podría absorber al primero. Además, reconoce que su representado debió haber conocido el origen espurio del vehículo. Termina sosteniendo que la declaración del acusado colaboró sustancialmente al esclarecimiento de los hechos pues se situó en el lugar y tiempo de los hechos.

Cuarto: Que el acusado, previa información de sus derechos y asistido por su abogado defensor, renunció a su derecho a guardar silencio. Pablo Gajardo comenzó su declaración indicando que el 26 de septiembre de 2023 iba manejando por calle Ramón Carnicer cuando fue controlado por la policía. Durante esta fiscalización se descubrió que las placas patentes del vehículo que conducía eran falsificadas. Afirmo que no conocía dicha circunstancia porque compró el vehículo con un poder notarial, pero que como es reincidente, estima que nadie le creerá.

Interrogado por el fiscal, precisa que lo detuvieron alrededor de las 13 o 14 horas del 26 de septiembre de 2023 en la intersección de las calles Ramón Carnicer y Caupolicán de la comuna de Peñalolén mientras conducía un vehículo marca Subaru de color rojo. Señala que compró este vehículo mediante un poder notarial en la plataforma virtual *Marketplace*, pero no recuerda quien fue el vendedor, ni acompañó documento alguno que respaldara dicha transacción. Se le exhiben las fotografías Nros. 1 y 7 del set fotográfico consignado como otros medios de prueba Nro. 2, en las cuales reconoce el vehículo al que se refirió en su declaración, cuyas placas patentes eran GHZT-91 y su respectivo motor.

Continúa su declaración al tenor de las preguntas efectuadas por su defensor. Refiere la dinámica del control policial, destacando que nunca intentó darse a la fuga o evitar dicha fiscalización. Indica que cuando los funcionarios policiales le dijeron que las placas patentes eran falsas, él adujo desconocer dicha circunstancia.

Quinto: Que el delito de receptación es un delito de peligro abstracto contra la propiedad cuya tipificación persigue impedir la existencia y proliferación de un mercado negro de objetos que han sido objeto de ciertos delitos contra la propiedad. De este modo, la estructura típica de la receptación presupone un catálogo cerrado de delitos base vinculado a las cosas que pueden venir en consideración como objeto de receptación.

Respecto a la conducta típica, este delito requiere que el autor tenga en su poder a cualquier título las especies mencionadas, que las transporte, compre, venda, transforme o comercialice en cualquier forma. A su vez, en su aspecto cognitivo, la norma de sanción exige que el autor conozca o no pueda menos que conocer el origen ilícito de las especies que han sido previamente objeto de uno de los delitos de dicho catálogo cerrado. Esta referencia al conocimiento del autor busca flexibilizar la prueba del dolo de la receptación como criterio de imputación subjetiva dependiendo de las circunstancias que rodearon su conducta.

A su vez, la hipótesis delictiva tipificada en el artículo 192 letra e) de la Ley Nro. 18.290 sanciona al que “a sabiendas” conduzca un vehículo motorizado con placa patente falsa, adulterada o que corresponda a otro vehículo. La expresión “a sabiendas” o su equivalente “maliciosamente”, puede ser interpretada como “una exigencia de conocimiento de la antijuridicidad como requisito de la punibilidad del hecho, cuya satisfacción ha de ser exitosamente demostrada por el órgano persecutor” (Juan Pablo Mañalich, “El delito como injusto culpable. Sobre la conexión funcional entre el dolo y la consciencia de la antijuridicidad en el derecho penal chileno”. En Revista de Derecho, 2011, Vol. 24, Nro. 1, pp. 87-115, Valdivia, p. 111).

Sexto: Que, como se indicó en el veredicto condenatorio, con el mérito de la prueba rendida y valorada de conformidad al artículo 297 del Código Procesal Penal, se tuvieron por acreditados los núcleos fácticos de ambos delitos sostenidos en la acusación, estos son, la receptación de vehículo motorizado y la conducción con placas patentes falsas. Asimismo, se probó que al acusado cometió ambos delitos en calidad de autor y en grado de desarrollo consumado, en términos similares a como aparece consignado en la acusación. Esto es, que el 26 de septiembre de 2023, alrededor de las 14 horas, el acusado Pablo Antonio Gajardo Peredo conducía cerca de la intersección de las calles Ramón Carnicer y Caupolicán un vehículo tipo Station Wagon, marca Subaru, color rojo, que exhibía las placas patentes GHZT-91, cuando fue fiscalizado por funcionarios de Carabineros de Chile, quienes advirtieron anomalías que indicaban que podía tratarse de placas patentes falsificadas. Durante el control policial se pudo constatar que el vehículo tenía grabada en todas sus ventanas la placa patente BYZD-45, correspondiente a un vehículo que fue objeto de un robo en lugar habitado el 2 de agosto de 2023 en la comuna de Ñuñoa y que mantenía encargo por robo Nro. 555494. El peritaje concluyó que las placas patentes exhibidas eran falsas.

Séptimo: Que en el origen ilícito del vehículo motorizado se fundó en que fue objeto de un delito de robo en lugar habitado, todo lo cual se desprende del Acta

de encargo de vehículos código EUN 555494 de fecha 2 de Agosto de 2023, respecto del vehículo placa patente única BYZD-45 que consigna que fue objeto de un robo en lugar habitado el 1 de agosto de 2023 y en que figura como denunciante Silvia del Carmen Donoso Sepúlveda y como propietario Jaime Arturo Tarud Rodway; el certificado de inscripción y anotaciones vigentes en el Registro Civil del vehículo placa patente única BYZD-45, cuyo propietario consigna a Jaime Arturo Tarud Rodway, quien lo adquirió el 16 de mayo de 2011; y el Certificado de inscripción y anotaciones vigentes en el Registro Civil del vehículo placa patente única GHZT-91 donde figuraba como propietario Jorge Eduardo Herrera Lacoste.

La tenencia del vehículo y sobre todo el conocimiento doloso del acusado respecto al delito de receptación se desprenden del testimonio de Juan Pablo Quiroga Escobar y Víctor Manuel Rioseco Solís, ambos carabineros que participaron del control policial vehicular y posterior detención del acusado, quienes señalaron que en las ventanas del vehículo aparecía grabada una placa patente distinta a la exhibida en la parte frontal y trasera del vehículo. Asimismo, ambos testigos fueron estuvinieron contestes en que el acusado no fue capaz de exhibir ninguna documentación del vehículo, ni que dieran cuenta de su legítima tenencia, lo que permite desestimar la credibilidad del relato del acusado, quien afirma que habría comprado el vehículo en la plataforma Marketplace de Facebook mediante un poder notarial, respecto de lo cual no se incorporó antecedente alguno.

Octavo: Que respecto al delito de conducción con placa patente falsa la conducta típica fue reconocida por el acusado quien refirió que el 26 de Septiembre de 2023, aproximadamente a las 14:30 hora iba conduciendo el vehículo marca Subaru de color rojo, portando la patente GHZT-91 cuando fue controlado por funcionarios de Carabineros en la intersección de Ramón Carnicer con Caupolicán en la comuna de Peñalolén, todo lo cual fue corroborado por la declaración de los funcionarios policiales ya referidos, quienes además reconocieron las fotografías contenidas en el Set Nro. 2 correspondiente al Informe Físico Técnico Nro. 211 correspondiente al vehículo que portaba la patente GHZT-91.

A su vez, la falsedad de las patentes quedó demostrada fehacientemente por la declaración del perito David Wilson Altamirano Reyes, quien detalló las diferencias entre la placa patente montada en el vehículo que conducía el acusado y una muestra testigo auténtica entregada por el registro civil para efectuar la pericia. El perito identificó diferencias en el material utilizado como soporte, la ubicación de sellos, la presencia de hologramas que deberían apreciarse sólo al inclinarse 45 grados y no permanentemente, entre otras características que le permitieron concluir que las placas patentes GHZT-91 eran falsas.

Noveno: Que la defensa no presentó prueba propia, ni se acordaron convenciones probatorias entre los intervinientes.

Décimo: Que tras el veredicto condenatorio por ambos ilícitos se abrió debate de conformidad a lo previsto en el artículo 343 inciso final del Código Procesal Penal para efectos de determinación de pena.

Primeramente, el fiscal incorporó el extracto de filiación y antecedentes del acusado, quien registra 4 anotaciones: i) como autor de receptación de vehículo motorizado, condenado a 541 días de presidio menor en su grado medio y multa de 1/3 de unidad tributaria mensual (en adelante U.T.M.), bajo la pena sustitutiva de remisión condicional, en causa Rol 3385-2022 del 13° Juzgado de Garantía de Santiago mediante sentencia de 21 de marzo de 2023; ii) como autor de tentativa de robo en bienes nacionales de uso público, condenado a 300 días de presidio menor en su grado mínimo, bajo la pena sustitutiva de prestación de servicios a la comunidad por 400 días, en causa Rol 5814-1013 del 8° Juzgado de Garantía de Santiago mediante sentencia de 15 de octubre de 2024; iii) como autor del delito de receptación de vehículo motorizado, condenado a 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo y multa de 5 U.T.M., en causa Rol 378-2024 del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua mediante sentencia de 30 de septiembre de 2024; y iv) como autor de tenencia ilegítima de teléfono en recinto penitenciario, condenado a 41 días de prisión en su grado máximo, en causa Rol 4482-2024 del Juzgado de Garantía de Rancagua mediante sentencia de 30 de septiembre de 2024. El representante del Ministerio Público propuso que, además, de la agravante prevista en el artículo 12 Nro. 16 del Código Penal relativa a una condena anterior por delito de la misma especie, se considere la atenuante prevista en el artículo 11 Nro. 9 del mismo cuerpo legal, por estimar que la declaración del imputado fue un aporte a la decisión condenatoria. Termina solicitando una pena de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo, por el delito de receptación; y 541 días de presidio menor en su grado medio, más el comiso de las patentes individualizadas con la N.U.E. 3446866, por el delito de conducción con placa patente falsa.

Por su parte, la defensa reitera las solicitudes de penas efectuadas por el Ministerio Público, salvo en lo relativo a la multa en que solicita su rebaja a un tercio de U.T.M basado en que el imputado se encuentra privado de libertad y que concurriría a su respecto la atenuante prevista en el artículo 11 Nro. 9 del Código Penal, sin costas por haber sido representado por la Defensoría Penal Pública.

Decimoprimer: Que no se acoge la circunstancia atenuante de haber colaborado de manera sustancial al esclarecimiento de los hechos, pues la declaración del acusado ofreció una versión muy distinta a la que finalmente se

probó en juicio. En efecto, el acusado sugirió que adquirió el vehículo de forma lícita, con un poder notarial que según su propia declaración nunca acompañó a ningún acto del procedimiento, lo que permite concluir más bien la inexistencia de dicho documento. Abona a esta misma conclusión la falta de elementos que permitan corroborar mínimamente su versión. Así, señaló que no recuerda quien fue su contraparte vendedora, a pesar de que si fuera cierto que lo contactó por una plataforma virtual como la sección Marketplace de Facebook, habría quedado registro de dicho contacto o negociación. El hecho que el acusado se haya situado conduciendo en el lugar de los hechos en la fecha indicada en la acusación no tiene la entidad suficiente para calificarla como una colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, sobre todo porque dichas circunstancias fueron probadas fehacientemente por la prueba testimonial rendida en juicio.

Decimosegundo: Que tampoco se acogerá la circunstancia agravante prevista en artículo 12 Nro. 16 del Código Penal porque el Ministerio Público no la acreditó suficientemente en la oportunidad procesal respectiva. En efecto, el fiscal se limitó a dar lectura a las anotaciones en el extracto de filiación y antecedentes del condenado, pero no incorporó copia autorizada de las respectivas sentencias, ni se hizo referencia a la fecha de los hechos en que se habrían cometido los respectivos delitos, lo que impide a este tribunal evaluar la pertinencia de dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 104 del Código Penal.

Decimotercero: Que la pena asignada al delito de receptación de vehículo motorizado se encuentra prevista en el inciso tercero del artículo 456 bis A del Código Penal, esto es, presidio menor en su grado máximo y multa equivalente al valor de la tasación fiscal del vehículo. Además, se ordena disponer el comiso de los instrumentos, herramientas o medios empleados para cometer el delito o para transformar o transportar los objetos sustraídos. Adicionalmente, la segunda parte del inciso quinto de la misma disposición prevé el aumento de la pena en un grado en caso de reiteración o reincidencia en la receptación de los objetos señalados en el inciso tercero. Sin embargo, por lo razonado en el considerando decimosegundo no se dará lugar dicho aumento de pena, pues el Ministerio Público no acreditó la reincidencia del acusado.

Decimocuarto: Que la pena privativa de libertad asignada en abstracto al delito de receptación de vehículo motorizado aplicable en la especie consta de un grado, esto es, presidio menor en su grado máximo. No habiendo circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal, de conformidad al artículo 67 inciso primero del Código Penal, el tribunal puede recorrer toda su extensión al aplicarla, por lo que se le impondrá la pena menor dentro del rango anteriormente delimitado,

esto es, 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo, tal como fue solicitado por ambos intervinientes y teniendo en consideración la menor extensión del mal causado por el ilícito, pues el vehículo objeto de receptación fue recuperado en buenas condiciones poco después de un mes desde la sustracción que dio origen al delito base. En consecuencia, se impondrán las penas accesorias previstas en el artículo 29 del Código Penal, según se dirá en lo resolutivo de esta sentencia.

Respecto a la pena pecuniaria se atenderá a lo dispuesto en el artículo 70 del Código Penal debido a que las facultades económicas del acusado se encuentran mermadas debido a su actual privación de libertad y que no se acreditaron a su respecto circunstancias agravantes, por lo que se procederá a su rebaja a un monto inferior al señalado por la ley, pero que se fija prudencialmente en el rango superior de lo debatido al respecto por los intervinientes, esto es, 1 U.T.M.

Asimismo, se ordenará el comiso de las patentes individualizadas con la N.U.E. 3446866 por tratarse de un medio empleado para ocultar el origen ilícito del vehículo receptado por medio de su transformación.

Adicionalmente, el delito de conducción con placa patente falsa se encuentra sancionado en abstracto con una pena privativa de libertad que consta de dos grados y multa de 50 a 100 U.T.M. Por las mismas consideraciones expuestas respecto del delito de receptación de vehículo motorizado, se impondrá la pena privativa de libertad menor dentro de dicho rango, esto es, 541 días de presidio menor en su grado medio; y la pena pecuniaria se rebajará igualmente a 1 U.T.M. Consecuentemente, se impondrán las penas accesorias previstas en el artículo 30 del Código Penal, según se dirá en lo resolutivo.

No se condenará en costas al sentenciado por haber sido representado por la Defensoría Penal Pública.

Decimoquinto: Que atendido que las anotaciones pretéritas del extracto de filiación y antecedentes del acusado le impiden acceder a una pena sustitutiva, el cumplimiento de las penas privativas de libertad deberá realizarse de manera efectiva, sin perjuicio del abono de 3 días que se expresaran en lo resolutivo y que corresponden al periodo que el acusado permaneció detenido y en prisión preventiva con motivo de esta causa.

Por estas consideraciones, lo preceptuado en las normas citadas y además lo dispuesto en los artículos 1, 14 Nro. 1, 15 Nro. 1, 18, 21, 25, 26, 50 del Código Penal; y artículos 1, 8, 45, 47, 292, 295, 297 y siguientes, 325 y siguientes, 340,

341, 342, 344, 346 y 348 del Código Procesal Penal; 593 y 600 del Código Orgánico de Tribunales, se declara que:

I. Se condena a Pablo Antonio Gajardo Peredo, ya individualizado, a las penas de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo y multa de una unidad tributaria mensual, más la accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, como autor del delito consumado de receptación de vehículo motorizado, perpetrado el 26 de septiembre de 2023 en la comuna de Peñalolén.

II. Se condena a Pablo Antonio Gajardo Peredo, ya individualizado, a la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio y multa de una unidad tributaria mensual, más la accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, como autor del delito consumado de conducción con placa patente falsa, perpetrado el 26 de septiembre de 2023 en la comuna de Peñalolén.

III. Se exime al condenado del pago de las costas de la causa.

Se ordena el comiso de dos placas patentes individualizadas con la N.U.E. 3446866.

De conformidad a lo establecido en el artículo 17 de la ley 20.568, inclúyase la presente sentencia en el respectivo informe mensual al Servicio Electoral, una vez que se encuentre ejecutoriada.

Ejecutoriada esta sentencia, ofíciase a los organismos que corresponda para hacer cumplir lo resuelto y remítase los antecedentes necesarios al Tercer Juzgado de Garantía de Santiago. Asimismo, en dicha oportunidad, póngase a los sentenciados a disposición del referido tribunal para el cumplimiento de la pena impuesta.

Regístrese y, en su oportunidad, archívese.

Redactó el juez suplente Hermes Hein Aedo.

Rit: 275-2024

Ruc: 2301044792-5

Pronunciada por el Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago integrado por los jueces Elisabeth Schürmann Martin, quien presidió, Manuel Guerrero González y Hermes Hein Aedo. Se deja constancia que el magistrado Manuel Guerrero González no firma por haber terminado su suplencia.